

# El agua, en campaña

MANUEL MIÑÉS MUÑOZ

Director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana

¿Sería posible imaginar un sistema por el que se conecten las cuencas excedentes con las deficitarias? ¿Es esto hoy un 'imposible autonómico'?

**E**spaña, el primer país de Europa en superficie de regadío, con 3,725 millones de hectáreas –que aunque sólo suponen un 20% de nuestro suelo agrícola cultivado, generan el 60% del PIB agrícola– nos enfrentamos a un cambio climático con una evidente falta de pluviometría que nos obliga a ser mucho más eficientes en el uso del agua. Seriamente hemos de considerar el agua un bien escaso, vital, renovable, de dominio público y uso privativo, en fin, un bien económico globalizado. Si bien, el regadío seguirá siendo una prioridad, no debemos –haciendo un mal uso de la PAC– aumentar las superficies regadas, llevándolas hacia cultivos de baja productividad y alta ineficiencia en su riego. Hemos de ir a una 'agricultura climáticamente inteligente' incluyendo conceptos como 'agua virtual' y 'huella hídrica', lo que supone una revolución intelectual en el uso agrícola del agua. Tengamos en cuenta que somos un país árido, mas no un país seco en cuanto a abundancia de lluvia, no así en cuanto a su distribución. Resulta poco racional que en España, para la gestión de un bien escaso y global como es el agua, hayamos caminado hacia la centrifugación de sus competencias.

¿Sería posible políticamente imaginar un sistema por el que se conecten las cuencas excedentes –Norte, Duero, Tajo y Ebro–, con las sedientes –Pirineo Oriental, Júcar, Segura, Guadalquivir y Sur–? ¿Es esto hoy un 'imposible autonómico'? ¿Os imagináis si esta territorialidad –fuente de duros enfrentamientos– la aplicáramos a la energía eléctrica... y sólo pudiéramos consumir en una ciudad, pProvincia o comunidad autónoma la producida en esa área geográfica?

Siendo nuestra capacidad de embalses y presas de 56.069 Hm3, el aforo a 8 de mayo 2023 tan solo alcanza el 48'9% (27.417 Hm3), y ante la situación de sequía, principalmente en las cuencas mediterránea y andaluzas, ¿qué hace el Mi-

nisterio de Transición Ecológica (MITER) para gestionar con rigor lo que hemos venido a denominar ciclo integral del agua?

Pues bien, los números: el ministerio, que dispuso entre 2018 y 2022 (legislaturas de Pedro Sánchez) de 6.018,17 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, según la IGAE (Intervención General del Estado), su inversión sólo alcanzó 3.401,79 Millones de euros. Se han dejado de invertir 2.616 millones, equivalentes al 43'47% de lo que se disponía. ¡Nadie ha dimitido ni nadie ha sido cesado ante tal nefasta gestión! Es más, al contrario, desde 2018, y mientras sufrimos la peor sequía de los 40 últimos años, el ministerio ha demolido 108 presas, ataguías, represas y azudes, para favorecer y recuperar la biodiversidad acuática de los ríos y sus riberas, fomentando el hidromorfologismo y la dinámica de los sedimentos, y estableciendo unilateral y arbitrariamente unos caudales ecológicos mínimos, sin consenso con las poblaciones rurales, la agricultura y la ganadería.

Hablemos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que gestiona 54 embalses ubicados en la C. Valenciana –salvo la Vega Baja de Alicante, que depende de la C.H. del Segura–, parte de la provincia de Albacete, y una mínima par-



JOSE MIGUEL ESPARCIA

te de la de Cuenca (Alarcón, con 1.118 Hm3) y parte de la de Teruel, tiene una capacidad de embalse de 2.850 Hm3 y está al 59,45% de su capacidad (1.692 Hm3). Ante esta situación de escasez, analicemos el Convenio de Alarcón del 23 de julio 2001. Como compensación a la construcción del embalse, pagado por los Usuarios del Júcar (agricultores valencianos y los titulares de los aprovechamientos industriales: molinos, papeleras y eléctricas) y que cedimos a la C.H. Júcar, la administración Central (AGE) se comprometió a transformar los regadíos tradicionales de la Ribera del Júcar, pasándolos a riego localizado por goteo y a modernizar las infraestructuras de riego de los arrozales. Todo ello debería ejecutarse (las obras) en 8 años. Finalizado el riego por goteo de las 20.500 hectáreas (246.000 hanegadas) que afectan a 21 poblaciones de la Ribera del Júcar, con plantaciones de cítricos, y frutales varios –164.000 hanegadas–, otras 27.000 hanegadas de huerta, y otras 54.000 de arrozal, circundantes al Parque Natural de la Albufera, supondría un ahorro de 46,22 Hm3/año de agua, que revertirían a la albufera y a su regeneración.

Pues bien, al 15 de mayo de 2023, transcurridos 23 años de la firma del Convenio – el compromiso era finalizar las obras en 8 años – todavía quedan, 85.000 hanegadas por modernizar (el 34,5%) que suponen una inversión pendiente de unos 125 millones de euros. En los 5 años del Gobierno de Sánchez, con la complacencia de la Generalitat, sólo se han invertido 19'475 Millones de euros, con lo cual tan sólo se han ahorrado 56,6 Hm3 en 5 años el objetivo es de 46, 22 Hm3/año. Todo este maltrato en inversiones hídricas unido al pretendido recorte de 100 Hm3/año del trasvase Tajo-Segura, hace que el agua, por la boca de los agricultores de la Ribera del Júcar (Valencia) y de la Vega Baja del Segura (Alicante) y de la Vega Baja del Segura (Alicante) también quiera votar por el cambio, en las elecciones del domingo.